


DATOS NOTIFICACION ELECTRONICA

Usuario conectado: CIPPITELLI LEONARDO PABLO
Organismo: CAMARA DE APELACION EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SAN MARTIN
Carátula: FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ TOYOTA MATERIAL HANDLING MERCOSUR IND. E COM. DE EQUIP. LTDA Y OTRO/A S/ APREMIO PROVINCIAL (310)
Número de causa: SI2-10204-2022
Tipo de notificación: SENTENCIA
Destinatarios: 20228250830@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR, FIORITI@FEPBA.GOV.AR
Fecha Notificación: 03/05/2024
Alta o Disponibilidad: 30/4/2024 13:08:05
Firmado y Notificado por: MENDEZ Mariana. SECRETARIO DE CÁMARA --- Certificado Correcto. Fecha de Firma: 30/04/2024 13:08:05
Firmado por: MENDEZ Mariana. SECRETARIO DE CÁMARA --- Certificado Correcto.
SAULQUIN Jorge Augusto. JUEZ --- Certificado Correcto.
BEZZI Ana Maria. JUEZ --- Certificado Correcto.
Firma Digital:  **Verificación de firma digital:** Firma válida

TEXTO DE LA NOTIFICACION ELECTRONICA

En la ciudad de General San Martín, en el día de su firma digital, los señores Jueces de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín, realizan acuerdo ordinario, estableciendo el siguiente orden de votación de acuerdo al sorteo efectuado: Jorge Augusto Saulquin y Ana María Bezzi, para dictar sentencia definitiva en la **causa N° 10.204** caratulada **"Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Toyota Material Handling Mercosur Ind. e Com. de Equip. LTDA y otro/a s/ Apremio provincial"**.

ANTECEDENTES

I.- Con fecha 8/5/2023, el Sr. Juez a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 2 del Departamento Judicial San Isidro, resolvió hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta por la parte demandada, declarar inoficioso el tratamiento de la excepción de inhabilidad de título opuesta, imponer las costas de la presente a la parte actora en su calidad de vencida y diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno.

Para así decidir, apuntó en primer término -y en lo sustancial- que se presentó en autos el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, por intermedio de la letrada representante de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, Dra. Laura Marina Fioriti, e inició juicio de apremio por deuda en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos (con más sus intereses y recargos) y multa por omisión contra Toyota Material Handling Mercosur Industria e Comercio de Equipamentos LTDA (en adelante, Toyota) y el Sr. Daniel Alfredo Crocitta. Precisó que tal reclamo se efectuó sobre la base del título ejecutivo n° 1.202.353, emitido en el marco del expediente administrativo n° 2360-0249215/2015 0000, por un total de pesos \$ 4.155.140,21

Asimismo, relató que el día 25/8/2022 se presentó en forma espontánea el Dr. Leonardo Pablo Cippitelli en su calidad de letrado apoderado de la firma accionada y del co-demandado Crocitta, oponiendo excepciones de inhabilidad de título y prescripción al progreso de la acción intentada.

En dichas condiciones, luego de reseñar el trámite de las actuaciones y de recordar los rasgos tipificantes del proceso de apremio, ingresó en el estudio de la excepción de prescripción opuesta por los demandados.

Con dicho norte, en atención a lo resuelto por la SCBA en el marco de la causa n° A. 71.388, caratulada "Fisco de la Provincia de Buenos Aires contra Recuperación de Créditos S.R.L. Apremio. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", en cuyo marco el Tribunal Címero Provincial resolvió declarar la inconstitucionalidad del art. 159 del Código Fiscal; apuntó que no correspondía computar el diferimiento del inicio de la prescripción allí dispuesto, debiendo analizarse si, en función de las fechas en que se encontraba expedita la obligación para cada uno de los

períodos detallados en el título ejecutivo acompañado en autos, había transcurrido el período quinquenal previsto por el art. 157 del CF.

En ese análisis, el a quo tuvo presente que el título n° 1.202.353 contenía las posiciones mensuales 01/2014 - con fecha de saldo 12/2/14- y su recargo exigible; 02/2014 -con fecha de saldo 12/3/14- y su recargo exigible; 04/14 - con fecha de saldo 12/5/14- y su recargo exigible; 06/14 -con fecha de saldo 14/7/14- y su recargo exigible; y 07/14 - con fecha de saldo 12/8/14- y su recargo exigible, más la multa por omisión aplicada en consecuencia.

Bajo tales parámetros, teniendo en cuenta que -conforme la doctrina judicial reseñada- el plazo quinquenal aplicable tenía necesariamente como punto de partida la fecha de vencimiento de cada período detallado, consideró que la excepción opuesta debía prosperar con relación a la totalidad de las posiciones detalladas en el cartular (01/14, 02/14, 04/14, 06/14 y 07/14) en tanto, respecto de ellas -sostuvo- se encontraba consumido íntegramente el término previsto por el art. 157 del C.F. Ello así, dijo, a la luz de los únicos hechos potencialmente suspensivos e interruptivos verificables en el caso a tenor de la prueba producida en autos (ver expediente administrativo n° 2360-0249215-2015): la intimación administrativa de pago de tributos determinados (cfr. art. 161 inc. a C.F.) cumplida mediante la Disposición Delegada SEATYS n° 12436/19 del 25/11/19 (ver fs. 3207/3217 del expediente administrativo acompañado en formato físico, cfr. constancia de fecha 28/4/2023), notificada a los aquí accionados con fecha 29/11/19 (ver fs. 3229 -al domicilio fiscal electrónico- y fs. 3233 y fs. 3234 a los domicilios físicos) y la promoción de la demanda (cfr. art. 160, inc. 3 C.F.), el día 24/11/2020.

Precisó que el cálculo del plazo de prescripción desde aquellas fechas permitía concluir que, al momento de notificarse la intimación administrativa de tributos determinados el 29/11/19, el plazo quinquenal de prescripción había expirado íntegramente. En razón de ello, concluyó que se encontraban prescriptos, por expiración del plazo aplicable, todos los períodos, recargos y multas incluidos en el título ejecutivo de autos.

En consecuencia, resolvió hacer lugar a la excepción de prescripción planteada por los accionados, tanto respecto de las obligaciones sustanciales reclamadas como de los recargos y multas incluidos en el título ejecutivo presentado (cfr. art. 157 del C.F.), dejando establecido que, atento el modo en que se resolvía la cuestión, resultaba inoficioso pronunciarse en torno a la defensa de inhabilidad de título opuesta por los demandados.

Finalmente, impuso las costas a la parte actora en su calidad de vencida y difirió la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno.

II.- Con fecha 16/5/2023, la parte actora se alzó contra dicho pronunciamiento.

En primer término, alegó -en lo sustancial- una errónea aplicación de la legislación y jurisprudencia por parte del a quo, al sustentar su fallo en el antecedente "Fisco de la Provincia de Bs. As. c/ Recuperación de Créditos SRL s/ Apremio", en el que la SCBA declaró la prescripción de todos los reclamados, con fundamento en la aplicación del art. 3956 del C.C.

Arguyó que dicho fallo de la SCBA no se encontraba firme ya que contra el mismo se había interpuesto-con fecha 08/05/2018- un Recurso Extraordinario Federal por ante la CSJN, el que -dijo- fue concedido por la SCJBA con fecha 17/10/2018 y remitido a la CSJN., asegurando que, en razón de ello, el mismo no constituía doctrina legal firme y por lo tanto, su aplicación no resultaba obligatoria. Citó jurisprudencia.

Sumó a ello que dicho precedente -"Recuperación de Créditos"- no resultaba doctrina legal, asimismo, por ausencia de fundamentos concordantes en los votos de la mayoría.

En ese sentido, apuntó que en la aplicación del precedente traído como doctrina legal sobre inconstitucionalidad de las normas locales que regulan ciertos aspectos de la prescripción en forma diversa a la legislación de fondo -en particular, la determinación del dies a quo- no había mayoría de votos concordantes, porque no todos los Jueces se pronunciaron respecto al nuevo CC y C.

En razón de ello, aseguró que no podía afirmarse que existía en la SCBA -desde la vigencia del nuevo CC y C- una mayoría de votos concordantes que sostuviesen la ausencia de facultades de la Provincia para legislar en la materia.

Por otra parte, se agravió por considerar que el a quo efectuó una errónea interpretación de las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación, arguyendo que debió aplicarse la normativa local arts. 159 y 161, CF para establecer el dies a quo y no el derogado Código Civil.

Sostuvo que el C.C. y C. no regulaba un nuevo plazo para la prescripción de la obligación tributaria, sino que remitía a la norma tributaria local que resultaba preexistente.

Postuló que era claro que resultaba aplicable al caso el régimen tributario local y no el sistema del C.C. y C., lo cual justificaba apartarse definitivamente de lo dispuesto por la doctrina de la C.S.J.N. en el precedente "Filcrosa" (Fallos, 326:899).

Tras referir a las dos posturas antagónicas que habían existido en torno a la prescripción liberatoria en materia tributaria local previo a la vigencia del C.C. y C. -a las que me remito por razones de brevedad-, destacó el impacto que tuvo el cambio legislativo con motivo del nuevo Código Civil y Comercial.

En ese entendimiento, señaló que estando en estudio la presente causa, el día 1 de agosto de dos mil quince, entró en vigencia el nuevo código, regulando la prescripción liberatoria en el Capítulo I, del Título I del Libro Sexto dicho cuerpo normativo.

Consideró que el a quo debió revisar la jurisprudencia imperante hasta este entonces, pues lo contrario implicaría dotar de una validez ultraactiva a la jurisprudencia como precedente hasta la actualidad, siendo que el legislador tomó una decisión definitiva en cuanto a que los plazos de prescripción de los tributos locales los regulan las provincias.

Entendió que este nuevo elemento justificaba sin ambages las disposiciones de la Constitución Nacional, por cuanto las provincias gozaban de autonomía plena en materia tributaria.

En tal sentido se destacó que el fallo traído era tan absurdo y arbitrario que le daba a una jurisprudencia el carácter de legislación y pretendía reestablecer la vigencia de una ley derogada. Citó jurisprudencia.

Sumó a ello que la consagración normativa de los arts. 2532 y 2560 en el Nuevo Código, venían a poner fin a una equívoca interpretación de las normas emergentes de la Constitución Nacional, que resultaban el pilar fundamental sobre los que se construyó el federalismo argentino, en relación a la autonomía económica y financiera de las Provincias, los Municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Alegó que la decisión que violaba la normativa tributaria específica, obstaculizaba la adecuada percepción de la renta pública, favoreciendo así las conductas renuentes al cumplimiento espontáneo de estas obligaciones e impidiendo que el Fisco provincial pudiera contar con los recursos suficientes para el adecuado cumplimiento de las políticas públicas. Citó jurisprudencia.

Por todo lo expuesto, entendió que debía declararse constitucional el art. 159 primera parte del C.F. y aplicar dicho Código Fiscal; señalando que ninguno de los períodos reclamados en autos se hallaba prescripto.

Agregó a ello que mal podía pretenderse que el Fisco debiera iniciar la ejecución de los tributos dentro de los cinco años de registrado el incumplimiento que generaba la deuda, omitiendo considerar que la ley preveía un procedimiento administrativo previo al inicio de toda acción judicial y que el mismo contemplaba la posibilidad de que el contribuyente se defendiese e interpusiera recursos, lo que no podía ser configurado como desidia, negligencia u omisión de gestión por parte del Ente Administrador, como había considerado el a quo.

En segundo término, se agravió en el entendimiento de que la sentencia de grado no efectuó un análisis del expediente administrativo acompañado como prueba informativa conforme la legislación fiscal vigente y no aplicó el marco normativo seleccionado.

Alegó que, si el magistrado de grado decidió aplicar un marco normativo distinto al CF, en el caso, el Código Civil ley 340, debió entonces analizar y resolverlo con todas las aristas previstas en dicho régimen. En ese contexto postuló que, en virtud del principio iura novit curia, el a quo debió aplicar el plazo del 4023 de 10 años al presente caso y no el art. 4027.

Señaló que, desde tal perspectiva, al aplicar las normas del derecho privado incurrió en un error de encuadre para arribar a la prescripción de la acción, dado que aplicó el plazo de 5 años del art 4027 inc. 3 (obligaciones

periódicas), cuando en el caso respecto del ordenamiento de fondo correspondía, por la naturaleza instantánea de la obligación, aplicar el pazo genérico del 4023.

Arguyó que, de ese modo, computando conforme lo que se desprendía del expediente administrativo n° 2360-0249215-2015, si las obligaciones correspondían al año 2014, conforme art 4023 en consonancia con el 2537 del CCC, vencía no antes del 1 de agosto del 2020, y aplicando el plazo de suspensión a partir del 29/11/2019 -que notificó la resolución determinativa que intimó de pago-, fuese por 1 año conforme art. 3986, o fuese por 6 meses (art. 2542 CCCN), surgía evidente que al 24/11/2020, día de inicio del juicio, la acción estaba vigente.

Sumó a ello que, a todo evento y llegado el caso que se entendiese que correspondía aplicar el Código Civil, tampoco se encontraría prescripta la deuda, por cuanto correspondía aplicar el art. 4023 CC: "...*Todo acción personal por deuda exigible se prescribe por diez años, salvo disposición especial...*".

Arguyó que la obligación del agente de recaudación no respondía al supuesto previsto en el art. 4027 inc. 3, pues no se trataba de una obligación que, en rigor, debiera pagarse por años o plazos periódicos más cortos.

Precisó que la acción ejecutiva tramitada, tenía fuente en una conducta imputable de TOYOTA MATERIAL HANDLING MERCOSUR IND. E COM. DE EQUIP. LTDA en su carácter de agente de recaudación, cuyo incumplimiento dio origen a los pertinentes títulos ejecutivos.

Dijo que, en ese marco, su deber frente al estado no la exponía con una obligación a plazo, por año o períodos más breves, sino con fuente en lo que percibía de terceros, y que se trataba de una obligación de carácter instantánea.

Concluyó sosteniendo que, si el magistrado optaba por la aplicación del ordenamiento civil, debía ser de aplicación el art. 4023 del CCCN, por ser una relación personal entre el agente de percepción y el fisco provincial la que se computaba.

Finalmente, en tercer lugar, se agravió de la imposición de costas.

Aseguró que en el caso resultaba procedente el supuesto consagrado en el actual art. 51.1, "in fine" de la legislación ritual administrativa, según el cual: "*el juez podrá eximir total o parcialmente del pago de las costas al vencido, siempre que encontrare mérito para ello.*".

Sostuvo -en lo sustancial- que dicha situación resultaba configurada en el caso de autos, toda vez que existían criterios disímiles en los Superiores Tribunales de Provincia y en el seno de la propia Corte bonaerense, con respecto a la cuestión de la prescripción discutida en autos.

Sumó a ello lo establecido por el Parlamento Nacional en los arts. 2532 y 2560 del nuevo Código Civil y Comercial, en los que el Legislador se pronunció por la autonomía de los Estados locales para regular en materia de prescripción tributaria, lo que implicaba que el tema resultó claramente discutible.

Dijo que todo ello demostraba que estábamos en presencia al menos de "cuestiones dudosas de derecho", por lo que consideró desacertada la imposición de costas efectuada por el a quo.

Agregó que tanto el C.P.C.C. al igual que el C.P.C.A., conferían amplias facultades a los jueces, para aplicar las costas del juicio en el orden causado, cuando existía alguna razón valedera para que esto sucediese; como -insistió- ocurría en autos.

Señaló que la posición jurídica asumida por su parte al contestar la demanda en cuanto al tema de la prescripción impositiva, había sido receptada favorablemente por la jurisprudencia de varios Superiores Tribunales locales, a saber: 1) TSJ Ciudad Autónoma de Buenos Aires: causas "Fornaguera Sempe" 23/10/2015; "B.S.H. Electrodomésticos S.A." 14/9/2016; "Walt Mart Argentina S.R.L." 3/10/2016; "Deutz Agco Motores S.A." 30/11/2016; 2) STJ Córdoba, "Fariña" 4/10/2017; 3) SJT La Pampa, "Dirección General de rentas c/D. L. M., M. J. s/Apremio" Causa 699, 22/6/2017.-

En base a ello, arguyó que resultaba admisible considerar que en el caso de autos se debatían cuestiones dudosas y complejas de derecho, que recién comenzaron a aclararse en el fallo "Volkswagen" de la CSJN; por lo que -reiteró- correspondía la aplicación de las costas en el orden causado, en virtud de lo dispuesto en el art. 51.1 parte final (texto ley 14.437). Citó jurisprudencia.

III.- Con fecha 16/5/2023, se dispuso el traslado del recurso referido, el que contestado por la parte actora en fecha 17/5/2023.

IV.- Con fecha 30/5/2023 se dispuso la elevación de las actuaciones, las que fueron recibidas en este Tribunal en fecha 30/5/2023 en soporte digital y en fecha 5/6/2023 en soporte físico, pasando los autos para sentencia con fecha 8/6/2023.

En dichas condiciones el Tribunal estableció la siguiente cuestión a decidir:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

VOTACION

A la cuestión planteada, el Sr. Juez Jorge Augusto Saulquin dijo:

1º) En primer término, debo referir que el recurso planteado resulta formalmente admisible. Ello, en tanto fue interpuesto contra la sentencia recaída en la causa, en escrito fundado y dentro del plazo previsto (sentencia del 25/10/2022; notificación electrónica del 28/10/2022 y recurso de fecha 28/10/2022; cfr. art. 13 de la Ley N° 13.406).

2º) Asimismo, que de la reseña efectuada se desprende en lo sustancial, que el juez de grado hizo lugar a la excepción de prescripción articulada por la parte demandada y rechazó en consecuencia la ejecución intentada.

Y que ante dicho pronunciamiento se alzó el Fisco actor, agravándose -en lo sustancial- de que el a quo decretara la prescripción de los períodos reclamados por aplicación de lo normado por el Código Civil de la Nación, en desmedro de lo dispuesto por el Código Fiscal de la Prov. de Buenos Aires.

3º) Sentado lo dicho, y a modo de introducción, cabe recordar que la prescripción liberatoria constituye un modo de extinción de las obligaciones que se produce por la concurrencia del transcurso del tiempo y la inacción o silencio del acreedor y requiere que este último sea titular de un crédito exigible e incorporado a su patrimonio. La misma posee un fundamento de interés público, que es la necesidad social de no mantener pendientes las relaciones de derecho sin que sean definidas en un plazo prudencial y respetar las situaciones que deben considerarse consolidadas por el transcurso del tiempo.

Estimo pertinente destacar además que, conforme lo detallado en los antecedentes del caso, la cuestión a decidir se circunscribe a determinar, por un lado, lo tocante al plazo de prescripción aplicable al caso de autos; y por el otro, lo relativo al comienzo de su cómputo en el supuesto del tributo implicado -Ingresos Brutos-, en tanto se ha desestimado -por aplicación de un precedente jurisprudencial emanado del Címero Tribunal local- el establecido por el artículo 159 de la Ley n° 10.397 (t.o. por Res. n° 39/11) -que lo fija al 1° de enero del año siguiente al del vencimiento de la presentación de la declaración jurada y pago respectivo-, privilegiando el contemplado en el artículo 3.956 del viejo Código Civil que lo establece desde la fecha de la obligación misma.

4º) En dicho marco, comienzo con el estudio de los agravios dirigidos a cuestionar el plazo de prescripción aplicado por el a quo.

Cabe recordar que la actora arguye que resulta de aplicación al caso el plazo decenal dispuesto por el art. 4023 del CC; ello en el entendimiento de que la naturaleza de la obligación es instantánea y de carácter personal.

Dicho artículo reza: *"Toda acción personal por deuda exigible se prescribe por diez años, salvo disposición especial (.)"*.

Los agravios no prosperan.

Es que el argumento sobre el cual sustenta su postura el Fisco, relativo al carácter de agente de percepción de la aquí demandada, no transforma el carácter periódico del impuesto en cuestión -ingresos brutos- en una obligación instantánea ni de carácter personal, que justifique la aplicación del plazo decenal previsto por el art. 4023 del CC.

Repárese que la referida periodicidad se desprende con claridad del título ejecutivo de autos, en el cual el propio Fisco precisa los distintos períodos por los cuales se reclama el impuesto en cuestión (del 1 al 7 del año 2014), y en el cual se señala: *"Descripción (.) TIPO DE ACTIVIDAD: MENSUAL"* (ver título n° 1202353, adunado digitalmente en autos).

En esa inteligencia, corresponde asimismo apuntar que el Tribunal Címero Provincial se ha expedido en relación al plazo de prescripción aplicable a las obligaciones tributarias, particularmente, a los impuestos sobre

ingresos brutos -como en el caso de autos-, resolviendo que correspondía estarse al plazo quinquenal dispuesto por el art. 4027 inc. 3 del Código Civil.

En ese sentido, sostuvo que: *"En lo relativo al plazo de prescripción de las obligaciones tributarias provinciales, se mantiene incólume la doctrina sentada por esta Corte en la causa C. 81.253, "Cooperativa Provisión Almaceneros Minoristas de Punta Alta Limitada", sentencia de 30-V-2007, que estableció el plazo quinquenal para las obligaciones fiscales, por aplicación del art. 4.027 inc. 3 del Código Civil"* (SCBA LP C 120506 S 06/11/2019 Juez DE LÁZZARI (SD); Carátula: Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Serpe, Antonio Pascual s/ Apremio; Magistrados Votantes: de Lázari-Soria-Negri-Pettigiani).

Cabe apuntar que, en el marco del antecedente referido en la cita que antecede ("Cooperativa Provisión Almaceneros Minoristas de Punta Alta Limitada"), el Dr. Roncoroni sostuvo que *"El Estado, sea el federal o el provincial, está entonces sujeto a las prescripciones del Código Civil. En el caso de los impuestos, se aplica el art. 4027, pues su último inciso abarca a '... todo lo que debe pagarse por años, o plazos periódicos más cortos', que es el caso de los impuestos inmobiliarios o sobre rentas o ingresos"*. Hay impuestos, por cierto, que no son periódicos, como los que gravan un contrato, y en general los sellados de diverso tipo. Por supuesto que estos últimos no son abarcados por el art. 4027 del Código Civil" -los énfasis me pertenecen-.

En dichas condiciones, el rechazo de los agravios expresados al respecto por la recurrente se impone.

5º) Sentado lo que antecede, encuentro necesario reiterar que la apelante objeta -en esencia- la interpretación que se le ha dado al precedente del Címero Tribunal provincial "Recuperación de Créditos S.R.L.", sosteniendo en tal tesitura que dicho fallo no constituye doctrina legal y, por tal motivo, no resulta obligatorio, dado que en el mismo habría -según su postura- ausencia de fundamentos concordantes; que tampoco se encuentra firme, atento encontrarse recurrido por ante la Corte Federal; y que, en consecuencia, resulta necesaria la aplicación de las normas del Código Civil y Comercial que han establecido dispositivos para asegurar la amplitud de las potestades autonómicas de las provincias en materia tributaria (art. 2.532 del C.C.y C.).

6º) Al respecto, cabe apuntar -tal como ha hecho hincapié la recurrente en su recurso- que en anteriores oportunidades esta Cámara regional se ha referido a la cuestión debatida en autos relativa a la constitucionalidad de las normas atinentes a la prescripción de las obligaciones tributarias contenidas en el Código Fiscal, habiéndose inclinado por la validez de las normas locales (ver, a modo de ejemplo, causas n° 1.724, "Fisco de la Pcia. de Buenos Aires c/ Leroux, Sandra Eleonora s/ Apremio", sent. del 15 de diciembre de 2.009; n° 2.895, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Palmieri, Jorge Francisco y otros s/ Apremio Provincial", sent. del 23 de febrero de 2.012; n° 4.715, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Domato, Laureano Carlos s/ Apremio provincial", sent. del 25 de agosto de 2.015; y n° 5.201, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Mazzuz, Patricia María s/ Apremio provincial", sent. del 23 de junio de 2.016, entre muchas otras).

Ahora bien, no puedo dejar de mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en la mencionada causa A. 71.388 caratulada "Fisco de la Provincia de Buenos Aires contra Recuperación de Créditos SRL. Apremio. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", sentenciada el 16 de mayo de 2018, resolvió -por mayoría de fundamentos concordantes- que el artículo 133 primer párrafo segunda parte del Código Fiscal (t.o. 2.004, actual art. 159 -t.o. Res. n° 39/11) que establecía el 'dies a quo' para el cómputo de la prescripción, resultaba inconstitucional.

En dicho precedente, el Señor Ministro Dr. Genoud sostuvo que: *"la atribución que confiere el art. 2.532 del nuevo cuerpo legal al legislador provincial, se refiere exclusivamente a la fijación del plazo de prescripción de los tributos locales"* y de allí que, en lo relativo a la forma de determinar el inicio del cómputo del plazo de prescripción de las obligaciones tributarias provinciales, cuestión debatida en autos, a mi juicio ha de quedar incólume la doctrina sentada por esta Corte en la causa C. 81.253, "Cooperativa Provisión Almaceneros Minoristas de Punta Alta Limitada", sentencia de 30-V-2007" -el énfasis me pertenece-.

En forma concordante, al emitir su voto, el Señor Ministro Dr. de Lazzari afirmó que: *"la única modificación incorporada por la nueva legislación es la atribución reconocida a las provincias para establecer el plazo de*

prescripción, lo que surge en forma clara, literal, sin oscuridad ni confusión alguna. La lectura de la versión taquigráfica de lo acontecido en el Honorable Senado de la Nación al tiempo de sancionarse la reforma robustece tal aserto, pues se aprecia que las modificaciones introducidas se refieren pura y exclusivamente al plazo.

Como consecuencia de cuanto vengo desarrollando, si por virtud del precedente "Filcrosa" y sucesivos de la Corte Suprema de la Nación, este Tribunal fijó como doctrina legal que la materia de la prescripción de tributos era competencia propia del Congreso de la Nación; y este último desdobló una parte de esa materia, un fragmento, la determinación de los plazos, reconociéndola a las provincias, en todo lo restante continúa vigente el criterio que remite al derecho común" -el énfasis me pertenece-

Por su parte, los Señores Ministros Dres. Pettigiani y Negri, si bien coincidieron en la declaración de inconstitucionalidad de la norma, entendieron que el Código Civil y Comercial no resultaba de aplicación en el caso.

Así, en el voto del Dr. Pettigiani puede leerse que: *"con apego a dicha doctrina legal y más allá de mi opinión volcada en los precedentes referidos, juzgo que el comienzo del plazo prescriptivo de la acción del Fisco provincial para perseguir el pago del impuesto sobre los ingresos brutos no puede alongarse en contraposición a lo dispuesto en el art. 3.956 del Código Civil más allá de la fecha del título de la obligación. No es óbice a lo aquí expuesto la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial (ley 26.994) desde que el mismo no es de aplicación al sublite (cfr. arts. 7 y 2.537 -a contrario sensu-)"*. El Dr. Negri, por su parte, señaló que: *"la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial (ley 26.994) no modifica lo expuesto, dado que este último no resulta de aplicación al caso. Observo, a través de una renovada lectura, que el art. 133 primer párrafo del Código Fiscal (actual art. 159) al regular el dies a quo ha colocado en situación considerablemente más ventajosa a algunos deudores del Fisco que a otros. Adviértase que al determinar el inicio del cómputo de la prescripción a partir del 1 de enero del siguiente año al cual se refieren las obligaciones fiscales, tendrán plazos prescriptivos más extensos quienes incumplieran sus obligaciones fiscales en tiempos menos próximos a la entrada del nuevo año. Entiendo que tal situación no sortea con éxito el análisis de razonabilidad que exige el control de la garantía de igualdad y que, en consecuencia, el art. 133 primer párrafo segunda parte del Código Fiscal (actual art. 159, texto ordenado 2011), resulta inconstitucional, pues regula una materia reservada al Congreso de la Nación al establecer un dies a quo ajeno a lo dispuesto en la norma de fondo, transgrediendo los arts. 18, 31 y 75 inc. 12 de la Constitución nacional (conf. mi voto en causa A. 71.538, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires contra Saranitte", sent. de 16-VIII-2017)"*.

Esta posición doctrinaria establecida en el aludido precedente ha sido reiterada posteriormente, con idéntica configuración de la mayoría, en las causas A. 72.397, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires contra Cefas S.A. Apremio. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley" (sent. del 5 de diciembre de 2.018); A. 73.098, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires contra Cejas, Leandro Omar. Apremio. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley" (sent. del 20 de marzo de 2.019); y A. 71.990, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires contra Barragán y Cía. S.A.C.I.F.I.A.N. y otros. Apremio. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley" (sent. del 29 de mayo de 2.019).

7º) En tal contexto, debo recordar que esta Alzada ha destacado en numerosas oportunidades el carácter vinculante de la doctrina legal de nuestro Máximo Tribunal local para los órganos judiciales de la Provincia de Buenos Aires (cfr. SCBA LP, causas B 60.437, "Acevedo", sent. del 5 de agosto de 2.009; y B. 56.824, "Brown", sent. del 14 de julio de 2.010, por citar algunas).

Así, se ha dicho que corresponde tener presente la obligatoriedad de los fallos del Superior para los de grado inferior, lo que impide apartarse de la doctrina sentada en los casos análogos por su naturaleza y circunstancias (SCBA LP en "Ac. y Sent.", 1959-IV-169), en tanto, la "doctrina legal" en el sentido del artículo 279 del CPCC es la que emana de los fallos de la Suprema Corte Provincial, no siendo necesario que la misma sea producto de la reiteración de fallos, ni derivada de un pronunciamiento sin disidencias (cfr. SCBA LP, Ac. 39.440, sent. 27-II-1990; y esta Cámara in re: causas n° 664, "Rabello, Fernando Adrián c/ Municipalidad de San Fernando s/ Despido", sent. del 19 de septiembre de 2.006; n° 823, "Zapata, Marta Cecilia c/ Municipalidad de San Fernando s/ Despido", sent. del 15 de febrero de 2.007; y n° 800, "Libonati, Antonio César c/ Honorable Tribunal de Cuentas s/ Impugnación contra Resolución del Tribunal de Cuentas", sent. del 29 de diciembre de 2.011, entre muchas otras).

Por tales motivos, y sin perjuicio de los matices entre los distintos votos que conforman la mayoría, lo cierto es que hoy por hoy el precedente "Recuperación de Créditos S.R.L." -y los dictados luego con sustento en él- constituye doctrina legal y en razón de ello, resulta de aplicación obligatoria para todos los órganos judiciales de la Provincia.

Así, lo que surge de dicha sentencia conlleva indefectiblemente a la desestimación de lo sostenido por la recurrente en cuanto a que aquélla no fue dictada por mayoría de fundamentos concordantes; como así también que la circunstancia de que se encuentre apelada por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación obste el referido carácter de doctrina legal que ostenta, en la medida de que es el criterio de actualmente impera en nuestro Máximo Tribunal provincial.

Sin perjuicio de ello, corresponde hacer saber que, tal como lo señalara el a quo en su pronunciamiento, el citado pronunciamiento del Máximo Tribunal provincial ha quedado firme, al declarar inadmisibile la Corte Federal -por mayoría de votos- el recurso extraordinario planteado por el Fisco provincial en dicha causa (cfr. CSJN, expte. n° CSJN 2658/2018/CS1, sent. del 22/10/2020).

Debe recordarse además, en tal inteligencia, que la obligatoriedad de los fallos de la Corte Suprema de Justicia Federal se encuentra discutida en la doctrina constitucional y judicial -y buena cuenta de ello lo expresan los votos de los distinguidos Dres. Genoud, de Lazzari y Hitters en la causa C. 87.191, "Perotti"- ante la falta de un texto constitucional o legal expreso (cfr. Gelli María Angélica, "Constitución de la Nación Argentina", pág. 981; Bidart Campos, Germán J., "Tratado Elemental de Derecho Constitucional", T II, págs. 561 y 55), a diferencia de lo que ocurría con la Constitución nacional del año 1.949, que preveía la obligatoriedad de los fallos de la Corte Suprema otorgando más racionalidad y seguridad jurídica en esta cuestión al existir dicho texto.

Sin embargo, no puedo dejar de destacar que de conformidad con la propia jurisprudencia del Máximo Tribunal Federal, si bien sus fallos *"no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a sus sentencias, por lo que carecen de fundamento aquéllas que se apartan de los precedentes del Tribunal sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el mismo, en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia, especialmente en supuestos donde dicha posición fue expresamente invocada por el apelante"* (cfr. CSJN, causa C.2374.XLII., "Casa Casmma S.R.L. s. Concurso preventivo s. Incidente de verificación tardía promovido por Municipalidad de La Matanza", sent. del 26 de marzo de 2.009, por remisión al Dictamen de la Procuración General).

Es decir, a diferencia de lo que ocurre con la jurisprudencia de la Corte Federal, la doctrina legal de nuestro Alto Tribunal Provincial sí resulta obligatoria para los órganos judiciales de la Provincia de Buenos Aires (cfr. SCBA LP, causas B 60.437, "Acevedo" y B. 56.824, "Brown", antes mencionadas, entre otras; y esta Cámara in re: causas n° 664, "Rabello"; n° 823, "Zapata" y n° 800, "Libonati", ya invocadas, por indicar algunas).

En consecuencia, y manteniendo el temperamento plasmado por esta Alzada recientemente -por aplicación de la doctrina emanada del Superior Tribunal provincial en la materia- en las causas n° 6.807/18, "Fisco de la Pcia. de Bs. As. c/ Moro, Enrique Omar s/ Apremio provincial" (sent. del 12 de julio de 2.018); n° 6.242/17, "Aibal Servicios Agropecuarios S.A. y otros c/ Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires [A.R.B.A.] s/ Impugnación contra sentencia del Tribunal Fiscal de Apelación" (sent. del 28 de agosto de 2.018); n° 6.789/18, "Coca Cola FEMSA de Buenos Aires c/ Municipalidad de La Matanza s/ Pretensión anulatoria" (sent. del 6 de noviembre de 2.018); n° 7.017/18, "Fisco de la Pcia. de Bs. As. c/ Enod S.A. y otros s/ Apremio provincial" (sent. del 8 de noviembre de 2.018); n° 7.269/18, "Fisco de la Pcia. de Bs. As. c/ J.P.G. Motor Sport de Juan P. Gianini y Darío J. Gianini S.H. y otros s/ Apremio provincial" (sent. del 19 de marzo de 2.019); y n° 7.430/19, "Fisco de la Pcia. de Bs. As. c/ Dos Arturos S.A. y otros s/ Apremio provincial" (sent. del 14 de mayo de 2.019), es que abordaré el planteo realizado por la apelante.

8º) Determinada esa plataforma analítica, y más allá de las apreciaciones que realizara la recurrente respecto al nuevo Código Civil y Comercial, lo cierto es que a la luz de la doctrina desarrollada en los considerandos que anteceden en torno a la inconstitucionalidad de las normas locales que regulan ciertos aspectos de la prescripción en forma diversa a la legislación de fondo, entiendo que corresponde entonces la aplicación de las reglas que en materia de prescripción contiene el derogado Código Civil de la Nación, en virtud de lo dispuesto por el art. 2537 del Código

Civil y Comercial de la Nación que prevé -en principio y en lo que aquí interesa- que los plazos de prescripción en curso al momento de entrada en vigencia de una nueva ley se rigen por la ley anterior (cfr. causa n° 6.789/18, "Coca Cola FEMSA", ya citada, entre otras), aclarándose que no se aplica la excepción contenida en el segundo párrafo de dicha norma en cuanto el plazo quinquenal se mantiene.

Así, en cuanto al plazo aplicable, el artículo 4027 inciso 3° de dicho cuerpo normativo establecía que: *"Se prescribe por cinco años, la obligación de pagar los atrasos: (.) 3° De todo lo que debe pagarse por años, o plazos periódicos más cortos"*.

Respecto del modo de computar la prescripción, su artículo 3956 rezaba que: *"La prescripción de las acciones personales, lleven o no intereses, comienza a correr desde la fecha del título de la obligación"*.

Por su parte, el artículo 3986 disponía que: *"La prescripción se interrumpe por demanda contra el poseedor o deudor, aunque sea interpuesta ante juez incompetente o fuere defectuosa y aunque el demandante no haya tenido capacidad legal para presentarse en juicio. La prescripción liberatoria se suspende, por una sola vez, por la constitución en mora del deudor, efectuada en forma auténtica. Esta suspensión sólo tendrá efecto durante un año o el menor término que pudiere corresponder a la prescripción de la acción"*.

9º) De conformidad con las normas precedentemente transcritas, y sin perjuicio del carácter anual del impuesto en cuestión (cfr. art. 209 de la ley 10.397, t.o. por Res. n° 39/11), considero que el plazo quinquenal de prescripción de cada uno de los anticipos implicados en el embate formulado por el recurrente -y sus recargos- comenzó a correr desde la fecha del título de la obligación, es decir, desde el momento en que resultaban exigibles.

En ese sentido, tomando el último período reclamado -07/2014-, se advierte que el mismo se tornó exigible en fecha 12/8/2014 (cfr. título ejecutivo), resultando prescripta la obligación al 12/8/2019.

En ese marco, observo -como lo hiciera el juez de grado- que el plazo prescriptivo respecto de la totalidad de los períodos reclamados feneció con anterioridad al dictado de la Resolución Determinativa -Disposición Delegada- n° 12436/19 del 25/11/19 (acto susceptible de alongar el plazo prescriptivo por el término de un año cfr. art. 3986 CC).

En efecto, repárese por una parte que para el período 07/2014 -el más reciente de los reclamados-, la prescripción comenzó a correr el 12/8/2014, de modo tal que la acción para reclamarlo prescribía el 12/8/2019.

Por otra parte, que la Resolución Determinativa -Disposición Delegada- N° 12436/19 -por la cual se intimara de pago al demandado- fue emitida en fecha 25/11/2019 y notificada al contribuyente en fecha 29/11/2019, es decir, más de tres meses después de operada la prescripción.

En razón de ello, continuando con el análisis del período reclamado más cercano en el tiempo -07/2014-, y teniendo en cuenta que la presente acción fue iniciada con fecha 24/11/2020 -más de 6 años luego de que la misma resultara exigible-, se concluye que, al momento de deducir la presente ejecución, la deuda cuyo cobro se perseguía se encontraba prescripta.

Idéntica solución se impone respecto del resto de los períodos y recargos reclamados -1/2014 a 6/2014-, atento que sus vencimientos resultaban anteriores al del período analizado.

10º) En definitiva, con fundamento en la doctrina legal apuntada y atento lo dispuesto por el antiguo Código Civil, considero que le asiste razón al magistrado de grado en tanto declaró prescripta la acción del Fisco Provincial para determinar y exigir a la aquí actora el pago del Impuesto a los Ingresos Brutos por los períodos reclamados.

11º) Finalmente, en cuanto al agravio relativo a la imposición de costas resuelta en la instancia de grado, debo señalar que, a mi entender, el mismo tampoco puede prosperar.

Cabe recordar que la apelante solicita la imposición de costas en el orden causado con sustento en que la cuestión planteada resultaba dudosa en cuanto a su interpretación por parte de los tribunales superiores, alegando que la cuestión había quedado aclarada a partir del antecedente de la Corte federal en la causa "Volkswagen", del 5/11/2019.

El agravio no prospera.

Es que, más allá de que -como se señalara párrafos arriba- la doctrina emanada de la SCBA en la causa A. 71.388 caratulada "Fisco de la Provincia de Buenos Aires contra Recuperación de Créditos SRL. Apremio. Recurso

extraordinario de inaplicabilidad de ley", del 16 de mayo de 2018, resultaba desde entonces doctrina legal, lo cierto es que, tomando el argumento ensayado por la recurrente, según el cual la cuestión había quedado aclarada recién a partir del fallo de la CSJN en la causa "Volkswagen", no puedo soslayar que dicho pronunciamiento data del 5/11/2019, esto es, un año antes de la promoción de la presente ejecución (del 24/11/2020). Dicha circunstancia echa por tierra el argumento tocante a la "cuestión dudosa de derecho", alegada por la apelante como justificativo de su pretensión en cuanto a las costas.

En razón de ello, no configurándose en el caso circunstancia alguna que justifique un apartamiento del principio objetivo de la derrota adoptado por el código de rito (art. 68 del CPCC art. 25 de la ley 13.406), es que corresponde rechazar el agravio en cuestión.

Por todo lo expuesto, propongo a mi distinguida colega: 1) Rechazar el recurso de apelación articulado por la parte actora; 2) Confirmar la sentencia de grado en todo lo que fue materia de agravios; 3) Imponer las costas de esta instancia a la actora recurrente en su calidad de vencida (cfr. arts. 25 de la Ley n° 13.406 y 68 CPCC); y 4) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad. **ASÍ VOTO.**

La Sra. Jueza Dra. Ana María Bezzi votó a la cuestión planteada en el mismo sentido y por idénticos fundamentos, con lo que se terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:

SENTENCIA

En virtud del Acuerdo que antecede, este Tribunal **RESUELVE:** 1º) Rechazar el recurso de apelación articulado por la parte actora; 2º) Confirmar la sentencia de grado en todo lo que fue materia de agravios; 3º) Imponer las costas de esta instancia a la actora recurrente en su calidad de vencida (cfr. arts. 25 de la Ley n° 13.406 y 68 CPCC); y 4º) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad. Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase a la instancia de grado.

20228250830@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

FIORITI@FEPBA.GOV.AR

Para verificar la notificación ingrese a: <https://notificaciones.scba.gov.ar/verificar.aspx>
Su código de verificación es: SL06XX



232101661001820346